**ADJUNTO PLANILLA AMPLIATORIA**

Señor Juez:

Julia Tamara Toyos, en mi carácter de Letrado apoderado de la parte actora, constituyendo domicilio legal en calle Belgrano Nº 1188 de esta ciudad de Salta, domicilio electrónico registrado bajo el CUIL 27-26685280-6 en autos caratulados **“Octavio Galvan c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS” Expte**. Nº 15000846/2009 a V.S. muy respetuosamente digo:

1. **OBJETO**
2. Adjunto planilla ampliatoria
3. Solicito se corra traslado de esta liquidación a la demandada por el plazo de 5 días en el domicilio constituido y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 504 del C.P.C.C.
4. Intime a la demandada a reajustar el haber bajo apercibimiento de aplicar astreintes ejemplificativas.
5. **Intereses:** solicito fije **intereses sancionatorios** atento a la reticencia de la demandada en cumplir con la manda judicial con el fin de que rectifique el comportamiento contumaz del deudor que se resiste a cumplir con la sentencia recaía en autos, fijándose el mismo en dos veces y media la tasa de descuento ordinario del banco Nación.
6. Solicito actualice la liquidación a la fecha de aprobación conforme la tasa fijada en la sentencia (pasivo comunicado 14290 BCRA) atento al periodo inflacionario que vivimos y la demora del juzgado producto del incumplimiento sistemática de Anses en cumplir INTEGRALMENTE la manda judicial.
7. Dejo planteada la inconstitucionalidad de la ley 27.609.
8. Solicito regule los honorarios profesionales por la labor desarrollada en esta etapa de la ejecución.
9. **Amplia liquidación**

El 25/08/2099 el juez de grado aprobó la liquidación de esta parte

1. **Adjunto liquidación**

Que vengo iniciar ejecución de sentencia por las diferencias adeudadas, no obstante existir una liquidación aprobada por VS, adjunto retroactivo por todo el período que va desde el 25/07/2003 al 25/07/2003.

1. **Documenta**l: La planilla se confecciono en base a la información brindada por la Anses (PRPA más recibos) y las sentencias recaídas en autos:

Sentencia de 1 ra instancia de fecha: 25/07/2003

Sentencia de 2 da instancia, Sala II, de fecha: 25/07/2003

Aprobación de liquidación al 25/08/2099.

Adjunto retroactivo.

1. **CONSIDERACIONES**:

Que vengo por la presente a promover ejecución de sentencia por las diferencias e intereses de los haberes no redeterminados por la ANSeS adeudados por el período comprendido entre **25/07/2003 al 25/07/2003** .

* **Percibido:** Se parte de un Haber Percibido de $518,37 del 01/08/2008
* **Reclamado:** El Primer Haber Reclamado es de $1.276,08 del 01/08/2008
* **Reparación histórica:** NoPercibió.
* **Asignación complementaria:** NoPercibió.
* **Suplemento dinerario**: No Percibió suplemento dinerario supera el 82% del SMVM.
* **Tope**
* Se aplico el tope del artículo 9 inc. 3 de la ley 24.463.
* Se aplico el tope de la PC máxima Art 26.
* Se aplico el tope remuneración actualizada
* Se aplico tope del art 24 de la ley 24.241.
* **Obra Social**: Los saldos retroactivos son calculados netos del Descuento por Obra Social.
* **Confiscatoriedad**: Sobre estos montos no se ordena la aplicación de quita alguna, por lo que se liquidó sin Confiscatoriedad desde el inicio hasta el fin del periodo analizado.
* **Intereses:** se calcularon hasta el 25/07/2003 aplicando para ello la Tasa Pasiva para uso de la Justicia (Com. 14290 BCRA).
* **Movilidad:** Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2017 y desde ahí Aumento de Marzo 2018 Ley 26417 según Revista Jubil. y Pensiones hasta el 30/06/2018 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad hasta el 31/12/2019 y desde ahí Aumentos fallo Marquez, Raimundo por Ley 27551 hasta el 31/12/2020 y desde ahí Aumentos Generales de la ANSeS por movilidad .
* **Haber de Alta Reclamado** al 25/07/2003asciende a $221.024,59.
* **Pagos descontados:** Se desconto pago de $12000 en el periodo 25/07/2003.
* **Retroactivo** exigible al 25/07/2003 determinado por el periodo 25/07/2003al 25/07/2003 en concepto de Capital resulta en $45454 concepto de Intereses a $ 1973179.65.

**Monto adeudado por diferencias no abonadas de $** **150000**

1. **Actualización monetaria**

Solicito actualización monetaria de las sumas a abonarse como retroactivo, hasta la fecha del efectivo pago, previa declaración de inconstitucionalidad del Art. 7 de la Ley N º 23.928, con las modificaciones introducidas por la Ley 25.561, art. 4°. La desvalorización que a la fecha ha sufrido la moneda, torna confiscatorio todo pago que no la compute.

El **22.02.2024** la CSJN señaló la Corte que *el estudio de problemas relativos a créditos de naturaleza alimentaria exige una consideración particularmente cuidadosa a favor de los derechos de los beneficiarios, por cuanto, en definitiva, gozan de protección constitucional (*[*Fallos: 323:1122, “Bianculli”*](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarTomoPagina.html?tomo=323&pagina=1122)*; entre otros),* si bien lo hizo en una causa de cuota alimentaria, las deudas previsionales siguen la misma suerte, por cuanto tienen carácter alimentario.

En los autos [“Recurso Queja Nº 5 - G.,S.M. Y OTRO c/ K.,M.E.A. s/ALIMENTOS CIV 083609/2017/5/RH003”](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7927263&cache=1709292121762) consideró el Tribunal que *la sentencia recurrida, al eludir el análisis relativo a la aplicación de un mecanismo destinado a preservar en el tiempo el valor adquisitivo de la cuota alimentaria fijada, omitió brindar suficiente respuesta al planteo de la actora —quien así lo había solicitado en el escrito de inicio— y adoptó una interpretación de las normas civiles en juego que desatiende su finalidad y afecta los derechos fundamentales de la niña (artículos 3, 6, inciso 2, y 27, Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 19, Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 3, 7, 8 y 29 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;*[*Fallos: 328:4013*](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarTomoPagina.html?tomo=328&pagina=4013)*, “F., L.”, considerandos 11° y 12°).*

*De ese modo, el tribunal abstrayéndose de la situación macroeconómica del país, juzgó la depreciación monetaria como un hecho incierto, forzando a la actora a iniciar periódicamente nuevos incidentes y a probar, en cada caso, que la prestación devino insuficiente.*

*De ese modo, exigir a la alimentada la tramitación periódica de nuevos procesos judiciales para obtener el aumento de la cuota cada vez que se deprecie su valor vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y economía procesal que deben gobernar los procesos que conciernen a la protección de los derechos de personas menores de edad.*

No puede negarse el paralelismo cuando de niños y adultos se trata en cuanto a que la normativa internacional, y la reiterada jurisprudencia de la CSJN les ha dado a ambos grupos de la sociedad una especial tutela(se adeudan a sujetos que, como adultos mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad, los cuales deben respuestas diferenciadas para lograr una especial tutela (Fallos [“Itzcovich”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5796151)328:566),[“Sánchez”](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5838941)(328:1602),[“Blanco”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7496611)341:1924)[“Giménez”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7678911)344:1788),“[Garay Corina](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7717371)”(344:3567) entre otros), tampoco que ambos beneficios tienen carácter alimentario y como afecta a todos la depreciación monetaria, como así también que en las causas previsionales los actores deben iniciar periódicamente actualizaciones de liquidación por cuanto la demandada se niega a cumplir con la manda judicial.

Es bueno recordar que la [ley 21.864](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21864-48989/actualizacion) establece:

*ARTICULO 1°. - Están sujetos a actualización, con arreglo a las disposiciones del presente capítulo: a) Los haberes o sumas emergentes de normas legales o reglamentarias atinentes al régimen nacional de jubilaciones y pensiones, que no fueren puestos a disposición de los titulares dentro del plazo de noventa (90) días.*

*ARTICULO 2°.- Si los haberes o sumas que correspondan no fueren puestos a disposición de los peticionarios o beneficiarios dentro de los plazos fijados en el artículo precedente, el importe de los mismos se actualizará sobre la base de la variación de los índices de precios al por mayor, nivel general, producida entre el mes de vencimiento de dichos plazos y el penúltimo mes anterior al que esos importes sean puestos a disposición del titular.*

*ARTICULO 3°- La obligación de abonar el importe correspondiente a la actualización surgirá automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna por parte del acreedor…*

El crédito previsional de mi mandante debe ser justipreciado- lo que se entiende como la determinación de su valor justo y real al momento del dictado de la sentencia- y es una obligación del juzgador que se sustenta en los principios de prudencia, equidad y sana critica racional, que el propio orden jurídico impone al sentenciante.

De ello se colige que la desvalorización de los créditos previsionales importa, por lo tanto, una lesión a un derecho fundamental del beneficiario de la prestación previsional.

La falta de actualización del crédito previsional reclamado, en el contexto de un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, constituye un atropello al derecho de propiedad de todo acreedor-en este caso sujetos vulnerables que gozan de especial protección- condenado a litigar en sede judicial y las normas que prohíben la actualización del crédito previsional sin duda han devenido en inconstitucionales.

Noten VS el mismo gobierno al dictar el DNU 70/23-más allá de su tramitación- pretendía reformar el artículo 276 y reconocer la actualización de deuda de los créditos laborales y establece: *ARTÍCULO 276.- Actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados y/o repotenciados y/o devengarán intereses.*

*La suma que resulte de dicha actualización y/o repotenciación y/o aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual”* **por lo que resulta absurdo seguir negando la prohibición de actualizar las deudas, Maxime cuando la jubilación deriva del trabajo.**

Si la política legislativa de este país y la medición de sus indicadores fuera cierta, no debería existir el litigio previsional, o al menos sería muy reducido.

No obstante, se observa que se ha convertido en una política de todos los gobiernos reformar el sistema previsional, siempre bajo el escudo de beneficiar a los que menos tienen, pero en la realidad, es para hacer un ahorro económico y perjudicar a los que menos tienen.

Que los jubilados tengan que concurrir a tribunales y colapsarlos para reclamar lo que es debido, es un indicador medido en cada reforma previsional, a sabiendas del poder administrador que solo el 15% de los beneficiarios inicia juicio previsional, y cuando los juicios llegan a su fin , la gente falleció o la deuda se licuo por estos dos criterios sostenidos por el juez de grado de sostener la prohibición de actualizar y fijar una tasa de intereses irrisorias, criterio que cambio en el máximo tribunal respecto a créditos alimentarios , de grupos vulnerables , donde se hizo mención a que debe primar la realidad en esos casos.

Es por ello por lo que solicito a Vs declare la inconstitucionalidad del art 7 de la ley 23.928 dado que la misma afecta el derecho de propiedad de mi mandante, porque han devenido inconstitucionales, porque están alejados de la realidad porque afectan la integralidad del haber previsional, el desarrollo humano y el derecho a una vejez digna, todos derechos protegidos por la Cn y vulnerados por la forma en que se resuelve alejada de la realidad y las circunstancias macroeconómicas lo que la tornan en una sentencia arbitraria.

1. **DE LA INCONSITUCIONALIDAD DE LA LEY 27.609**

La ley 27.609 ha demostrado ser insuficiente para mantener el poder adquisitivo del haber de mi mandanteen el tiempo, lo cual afecta derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional como son la garantía de integralidad (art. 14 bis ), el derecho de propiedad (art 17 CN) , el derecho al desarrollo humano ( art 75 inc. 22) , y los derechos que emanan de los tratados internacionales(art 75 inc23), pero sobre todo afecta el derecho a la vida y a una vejez digna.

Teniendo en cuenta las circunstancias jurídicas sucedidas durante este proceso, esto es suspensión de la ley de movilidad jubilatoria por la ley 27.541, derogación de la ley 27.426, sanción de la ley 27.609, y se agrega ahora el reconocimiento efectuado por el decreto 274/24.

Los fallos Márquez y Luna difieren para la etapa de ejecución el análisis de la ley 27609 , al momento de presentar esta liquidación el daño que produjo la ley de movilidad en los haberes de los jubilados es tangible y de público y notorio y ha sido reconocida por el gobierno nacional en el [decreto 274/24](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-274-2024-397577/texto) expresamente al decir:



No hay mucho más para decir, por cuanto el propio estado reconoció las falencias e insuficiencia de la fórmula y el daño que le ocasiona a los adultos mayores , al grado tal que justifica la necesidad del decreto de emergencia en la realidad .

Las jubilaciones en 2023 tuvieron un aumento del 111% acumulado y con un rezago de entre 3 y 6 meses.

La inflación de 2023 fue 211%, casi el doble, pero, si se considera que la forma de medir la movilidad anual de los aumentos a las jubilaciones es tomar los 4 aumentos del año, es decir: de marzo(17,04%), junio(20,92%), septiembre(23,29%) y diciembre (20,87), este último aumento lo percibieron los jubilados hasta febrero de 2024, para poder evaluar la pérdida **real** que tuvieron los jubilados en el poder adquisitivo de sus haberes , debemos considerar desde marzo de 2023 a febrero de 2024 , es decir hay que tomar el valor interanual de ese período y ahí el monto es notablemente superior a la inflación acumulada de 2023, tomada anualizada , a saber:



A 3 años del dictado de la nueva ley, el daño sido probado , se ha demostrado que los aumentos son insuficientes , lo cual fue reconocida por el poder ejecutivo que quien tiene a su cargo el pago de los haberes previsionales. El gobierno lo reconoció públicamente y otorgó 23 bonos en 34 meses, solo en 11 meses no se dieron bonos y se siguen dando bonos .



Los dos últimos bonos de diciembre 2023 y enero 2024 tuvieron una incidencia del 55% en el haber mensual, acumulando una incidencia en el período del 210%, la cual surge de comparar cuánto representó el bono en cada haber mensual, sumando así los aumentos diferenciales acumulados.

Estos números intentan demostrar a VS lo que implicaron estas sucesivas reformas previsionales desde 2017 a la fecha en el haber de mi mandante, y cómo afectaron la integralidad de su haber jubilatorio, debiendo ser evaluadas de manera conjunta pues el haber de mi mandante es uno solo, y la aplicación de las normas dictadas en el periodo 2017 a 2024 incumplen con la manda Constitucional y omiten darle a las normas el contenido que previó el convencional constituyente al darle al Poder Legislativo la obligación de fijar por ley el derecho a la movilidad jubilatoria, así dijo el máximo tribunal *“la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad, no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida”* ([Fallos 330:4866, considerando 15](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6359051)) *y que si bien el legislador cuenta con amplias facultades para organizar el sistema previsional, debe hacerlo dentro de ciertos límites de modo de no afectar de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social* (Fallos 337:1277)”

Si se afecta el derecho a la movilidad jubilatoria, se afecta el derecho de propiedad, el derecho a una vejez digna; el derecho a la libertad y el derecho a la vida, por cuanto la merma en su haber lo coloca por debajo de línea de pobreza. Su haber jubilatorio no refleja el esfuerzo contributivo realizado a lo largo de su vida, y en consecuencia no resulta sustitutivo del salario.

No se necesita adjuntar la equiparación de mi mandante, para acreditar lo manifestado, cuando se observa que la jubilación no tuvo los mismos aumentos que la mínima. El sueldo promedio de la economía [RIPTE](https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte) : $ 447.079,57 al 11.23; está por debajo del [SMVM](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/295159/20230929) $ 156.000 al 12.23 y del [haber mínimo de servicio doméstico](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/295819/20231010) que está en $173.757 -haber de una empleada de servicio doméstico con retiro por 8 horas de trabajo- y se encuentra por debajo de lo que una persona necesita para no caer en la pobreza al 12.2023 $160.453 conforme la [CBT](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_01_245800192340.pdf) publicada por el INDEC. A ello debemos sumarle el reconocimiento expreso realizado por los otros dos poderes del Estado, que miran el problema para el futuro, pero se olvidan de recomponer el pasado , pese a haber admitido el fracaso de la fórmula de movilidad jubilatoria , la pérdida que significo para los jubilados, y la situación de emergencia en que los colocó.

No podemos olvidar que la CSJN tiene dicho que *“…La Constitución Nacional establece que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social”, dispone que las jubilaciones y pensiones serán móviles”. Es indudable que el mandato constitucional se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer criterios que se estimen adecuados a la realidad para determinar los haberes previsionales, pero los cambios de circunstancias pueden hacer que la solución legal, correcta en su comienzo, se torne irrazonable. Cuando ello sucede el cumplimiento de aquel mandato constitucional atañe también a los restantes poderes públicos, los que deberán dentro de la órbita de su competencia, hacer prevalecer el espíritu de los constituyentes, dentro del marco que exigen las diversas formas de justicia”* ([Fallos 301:317](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=2271)).(el subrayado me pertenece)

No se puede hacer un análisis sesgado de la realidad y lo que en su momento pudo ser razonable en su momento, el cambio de circunstancias lo tornó irrazonable. Es lo que sucede por cuanto difiere para la etapa de ejecución en análisis de constitucionalidad de la ley 27.609, donde la movilidad fue muy por debajo de la inflación, conforme lo acredito en autos.

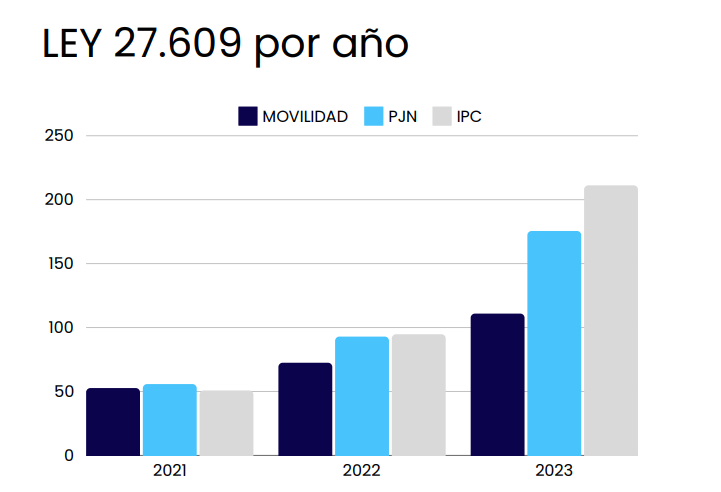
Dependerá el índice que se elija para comparar los aumentos que dio la Anses a los jubilados para ver la pérdida que tuvo el haber. Con cualquier índice que se elija pierde, pero con la inflación más, índice que se utlizará para la movilidad jubilatoria desde abril de 2024. La fórmula de movilidad de la ley 27.609 no tiene como un componente directo la inflación , sino otras variables que han sido modificadas por el gobierno de turno, como son la recaudación tributaria, los recursos o los beneficiarios del sistema, y que la forma en que da los aumentos tienen un rezago que es insostenible en el periodo inflacionario que vivimos, dado que los jubilados viven con el aumento de las variables económicas con 6 a 9 meses de rezago.

La movilidad de marzo se fijó en 27,18%, refleja la variación de las variables económicas de octubre a diciembre, donde la inflación fue de 53,28%, y deberá percibir ese aumento hasta junio de 2024. Es decir que con ese magro aumento deben hacer frente a una pérdida exponencial del poder adquisitivo en su haber.

Si comparamos IPC que es único índice-pese a que no refleja la variación real de los precios- que sirve para medianamente mantener el poder adquisitivo de los haberes previsionales observamos que:



Los bonos otorgados a las jubilaciones mínimas, a diciembre de 2023, parecería colocar a los jubilados en una situación similar a lo que sucedió en el período 2002 a 2006 que obligó a que la CSJN dictara el fallo Badaro ([330:4866](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6359051)) y eligiera un índice salarial el período en cuestión. En la actualidad un índice salarial no sería adecuado, por cuanto todos los índices salariales que se tomen de referencia se ven afectados por la precarización laboral, la práctica de fijar sumas no remunerativas, la caída del empleo, por lo que los índices salariales, salvo el UMA, no refleja una variación real de los salarios y están muy alejados de la inflación.



Solicito analice el pedido de inconstitucionalidad teniendo en cuenta el desarrollo que hace la CSJN sobre el [principio de progresividad](https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/22/documento) en materia previsional y el propósito constitucional de promover el bienestar general y afianzar la justicia el cual debe ser entendido como una virtud al servicio de la verdad sustancial, lo cual se expresa mediante pronunciamientos que conduzcan a consagrarla, así dice: *"Cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la misma ley en que se encuentra inserto, de modo tal que llega inclusive a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional o su aplicación torna ilusorios derechos por éstos consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejarlo de aplicar a fin de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está encargado de administrar. Asimismo, señaló que la latitud de facultades que se ha reconocido al legislador para organizar los sistemas jubilatorios y establecer las condiciones con sujeción a las cuales se acuerdan los beneficios derivados de aquéllos, debía entenderse condicionada a que esas facultades se ejerciten dentro de límites razonables, o sea de modo que no hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social, acordados a las personas comprendidas en los regímenes previsionales”* ([Fallos: 307: 2376](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=24586)), es por lo que solicito al tribunal garantice el derecho a que mi mandante tenga un haber integral y una movilidad jubilatoria que cumpla con su función, que no es otra que mantener el poder adquisitivo del haber jubilatorio, de manera tal que sea sustitutivo del salario y refleje el esfuerzo contributivo realizado durante su vida laboral activa, teniendo en consideración la protección especial que merecen los adultos mayores como sujetos vulnerables que gozan de especial tutela, en concordancia con lo resuelto en los Fallos [“Itzcovich”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5796151)328:566),[“Sánchez”](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=5838941)(328:1602),[“Badaro”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6359051)330:4866),[“Blanco”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7496611)341:1924)[“Giménez”(](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7678911)344:1788), “[Garay Corina](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7717371)” (344:3567) entre otros.

Las modificaciones en la fórmula de cálculo de la movilidad previsional, no puede proyectarse en perjuicio de los jubilados y pensionados, debiendo adoptarse una solución que se adecue a los principios y garantías de la Constitución Nacional y favorezca la progresividad de los derechos humanos. Al respecto cabe recordar que el Alto Tribunal sostuvo que el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional fortalece la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo accionar gubernamental que en la práctica de un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos [(Fallos 331:250](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6398361&cache=1628881211401)).

Cada reforma previsional se sitúa siempre en un marco de sucesiones de emergencias casi inacabable , lo que lleva a preguntarnos como dice Cassagne, si se cumple con “el marco constitucional de la emergencia”, el que según el mismo autor requiere que “no se conculque de un modo definitivo el núcleo de derechos básicos de la Constitución, particularmente los derechos de propiedad de los particulares (art. 17), el principio de igualdad ante la ley (art. 16) y la garantía de la razonabilidad o justicia, consagrada en el art. 28, CN.” [[1]](#footnote-1)

La normalización de la emergencia en nuestro país y sus graves consecuencias con respecto al cercenamiento de los derechos constitucionales es tan evidente que el entonces presidente de la Corte Suprema sostuvo ya hace más de diez años: *“cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo de más de setenta años. Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico”*.

Esa emergencia casi permanente llevó así a la tolerancia de un Estado pendiente de las variables económicas y financieras coyunturales y restrictivo de las libertades y derechos fundamentales.

Ante el altar de la emergencia, el Estado (por acción o por omisión) ha venido sacrificando sistemáticamente derechos elementales reconocidos por la Constitución, en especial, los de los más vulnerables. Y así ha dado por tierra con varios de los principios aplicables en esta materia, como el de progresividad y no regresividad que importan un escrutinio agravado de la razonabilidad de las normas adoptadas como consecuencia de las “emergencias” tanto por el legislador como por el Poder Ejecutivo Nacional.

Es que como afirma Rossi, las medidas regresivas respecto de grupos vulnerables deben ser más excepcionales aún y sujetas entonces a un escrutinio más estricto. La deferencia hacia el Estado respecto de la adopción de medidas regresivas respecto de estos grupos debe ser mínima. Al igual que el contenido mínimo de un derecho no admite restricción posible, tampoco la admite el estado de goce y ejercicio de un derecho por grupos considerados desfavorecidos. [[2]](#footnote-2)

La CSJN al referirse a emergencias y grupos vulnerables dijo: “*Que, por último, cabe destacar que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos”(*[*Fallos 341:1924*](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7496611)*).*

Por lo expuesto es que, en casos como el presente, la prohibición de regresividad agrega un nuevo criterio al control de razonabilidad de las leyes y reglamentos cuando se examina judicialmente la adopción de normas que reglamentan derechos económicos, sociales y culturales, y es por ello que solicito a VS hagan a la petición formulada e intimen al Congreso de la Nación a hacer efectivo el mandato del art. 14 bis citado, reparando el daño sufrido en el haber de mi mandante, fijando el contenido concreto de las jubilaciones en el período en debate*,* y como dijo la CSJN en “Blanco” *con especial ponderación de los principios de proporcionalidad y sustitutividad, según fueron establecidos por este Tribunal en numerosos precedentes (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602), de conformidad con la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de derechos sociales”*, donde si bien se refería al índice de actualización de remuneraciones, aplica también para la pauta de movilidad.

1. **SOLICITO FIJE INTERESES SANCIONATORIOS**

Habiendo venció del plazo para que la demandada Anses cumpla de manera correcta con la sentencia recaída en autos y teniendo en consideración su reiterada conducta de mostrarse reticente en el cumplimento integral de la manda judicial, aun cuando denuncia pagos que no se corresponden con lo ordenado, solicito a VS fije intereses sancionatorio, determinando desde cuando deben aplicarse los mismos, que tasa usar y la metodología en caso de pagos parciales, dejando expresamente aclarado que no existe anatocismo, por cuanto su fuente ontológica es la disposición judicial, teniendo el interés sancionatorio una función de castigo tendiente a rectificar el comportamiento contumaz del deudor que resiste el cumplimiento de lo debido fijándose el mismo en dos veces y media la tasa de descuento ordinario del banco Nación.

El Art 769 del CCCN dispone que los Intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal.

Es una Tasa porcentual con relación al monto del capital, en la proporción temporal.

Su origen Art 790: Es una Imposición al deudor para cumplir una obligación y para escarmentarlo en caso de que no ajuste su conducta a lo debido, se proyecta como una pena o sanción: resarcir la mora y además castigar el incumplimiento.

Los intereses punitorios no se limitan a tener una función resarcitoria del incumplimiento de la obligación de dar dinero, sino que además lo castiga. *Necesariamente, tal circunstancia debe traducirse en una tasa superior, en comparación con el moratorio*, por lo que fijar tasas sustancialmente menores, importaría un aliciente para el no cumplimiento de las deudas, y fundamentalmente, trasformara a los tribunales en una fuente barata de financiamiento para los deudores morosos.

* Solicito expresamente se expida **desde cuando** se aplican *dado que pueden considerarse diversas fechas según desde donde VS considere que el deudor incumple:*
* Fecha de sentencia del Juez.
* Fecha de cierre de la liquidación.
* Desde la fecha de vencimiento de la sentencia ejecutoria.
* Al considerar las mismas consideramos que el Juez debe ser quien estipula la fecha de aplicación de los intereses sancionatorios.
* **Respecto de la tasa de intereses** la misma debe ser más que un mero intereses moratorios por cuanto el Art 794 dice que para pedir una pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido prejuicio, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno, lo cual no implica, hacer una aplicación desmedida que se pueda considerar como usura.

Considero que no debe aplicarse la tasa pasiva del banco de la nación comunicado 14290 porque tiene capitalización encubierta.

Con respecto a la aplicación de la tasa que puede aplicarse al deudor contumaz pueden ser, utilizando tasas vigentes a enero de 2024:

* Tasa Pasiva del Banco de la Nación Argentina TNA 167.38%
* Aplico su capital a intereses por plazos fijos, Tasa de Interés Pasiva TNA (Tasa Nominal Anual) 110%.
* Tuvo que endeudarse con tarjetas de créditos TNA 147.63%, siendo su CFTEA 302,81%
* Solicitar préstamos personales en Banco Nación, TNA 177,87%. CFT 425,20%

Por lo expuesto más arriba la tasa debe ser más alta a la Pasiva que se aplica a intereses moratorios, para no solo resarcir el daño sino también de castigar al deudor y máxime teniendo en cuenta que el destino de los fondos de mi mandante que ni fueran para consumo, podrían ser para colocar en plazo fijo, estableciendo una Tasa porcentual con relación al monto del capital, en la proporción temporal.

A modo de ejemplo: si consideraremos los distintos tipos de tasas mencionados en el acápite anterior, con una mora de 365 días y de un capital de $ 1.000.000.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Monto Deuda** |  | $ 1.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pasiva** | **Plazos** | **Deuda Tarjetas** | **Solicito** |
|  | **Banco Nación** | **Fijos** | **Crédito** | **Prestamos** |
| Tasa Interés | 167,38% | 110,00% | 147,63% | 177,87% |
| Monto Interés | 1.673.800 | 1.100.000 | 1.476.300 | 1.778.700 |
| Total de la Deuda | 2.673.800 | 2.100.000 | 2.476.300 | 2.778.700 |

Hago reserva de ampliar la presente liquidación cuando VS fije la tasa, y el modo de liquidar los intereses sancionatorios.

1. **Astreintes**

Solicito se intime al organismo previsional a que proceda a reajustar el haber de mi mandante bajo apercibimiento de aplicar astreintes ejemplificativas por cada día de demora en efectivizar la medida ordenada, como así también se identifique al funcionario responsable de cumplir con la manda judicial.

1. **SOLICITO FIJE INDEMNIZACION POR DAÑOS**

Atento a la deficiente actuación de la Anses que nos obliga a desplegar una intensa actividad administrativa y judicial para que cumpla con la obligación de respetar la sentencia recaída en autos, tendiente a al pago de un haber integral, resulta necesario se fije una indemnización por los daños que le ocasiona el incumplimiento reiterado del organismo, dado que no cumple con la obligación específica a su cargo, negándose a reajustar el haber de mi mandante por lo que es un motivo más que valido para que se lo condene a pagar una indemnización por el daño causado o, en su defecto pagar la deuda debidamente actualizada.

La indemnización no solo tiene como finalidad la reparación integral de los daños causados, sino también permitir al beneficiario afrontar los gastos que su condición le genera, único modo de dar plena efectivad al principio de reparación integral, conf. art 19 y 75 inc. 22 de la CN, fallos de la CSJN 308:1118; 327:3753.

En el presente caso se dan los requisitos de la **responsabilidad del Estado por su inactividad conforme el art 3 de la ley 26.944.**

El Estado debe respetar al adulto mayor y debe respetar su proyecto de vida, el incumplimiento reiterado de Anses y su negligencia de cumplir con la condena, aniquila el mismo por la omisión durante casi una década de pagar el haber integral fijado en la sentencia, y los intereses fijados en la misma.

Como corolario de estas peticiones no puedo dejar de preguntarme que Sanción cabe por incumplir una sentencia judicial. ¿no tiene ninguna consecuencia, al menos para el Estado Nacional? Anses no paga, no se sanciona, se licuan las deudas, se fija una tasa pasiva que no logra reparar el haber conforme creciente inflación, no se sanciona ni penal ni civilmente a los encargados de cumplirla, entonces que nos queda….

Vienen al caso aquí las palabras de Germán Bidart Campos cuando señalaba que *“…con las emergencias económicas hay que tomar una precaución inicial, porque generalmente tienen origen -próximo o remoto, mediato o inmediato- en las políticas del Estado…”.*

Y agregaba respecto de la emergencia que *“…no es justo ni razonable que la consecuencia para enmendarla y superarla se transfiera a los gobernados, que no tuvieron arte ni parte en la equivocación…”* [[3]](#footnote-3)

La CSJN en el caso “Pietranera” [[4]](#footnote-4) ha manifestado que el no cumplimiento por parte del Estado de las sentencias judiciales importaría colocarse fuera del orden jurídico, cuando es el Estado quien precisamente debe velar con más ahínco por su respeto.

1. **De la Inconstitucionalidad del Régimen de Movilidad Argentino.**

Si de algo carece el jubilado Argentino es de la falta de previsibilidad y de seguridad jurídica respecto de su futuro como Jubilado, pero lo que es claro es que siempre pierde, lo cual va en contra de los principios que emanan de la Constitución Nacional, de la integralidad, sustitutividad , proporcionalidad, y solidaridad ( la correcta : intergeneracional) afectando con sus modificaciones constantes el principio de progresividad y en clara contradicción con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina y con Jerarquía constitucional y que son acordes a la jurisprudencia del máximo tribunal en cuanto a la protección de los derechos de los adultos mayores por su particular situación de vulnerabilidad.

Todas las modificaciones introducidas desde 1995 a la fecha en el régimen de movilidad, tiene un neto carácter regresivo, por cuanto la afectación de la movilidad dispuesta por las leyes anteriores se traduce siempre en un perjuicio económico confiscatorio para el beneficiario, reduciendo en forma retroactiva el monto del haber que le hubiese correspondido.

Las modificaciones en la fórmula de cálculo de la movilidad previsional, no puede proyectarse en perjuicio de los jubilados y pensionados, debiendo adoptarse la solución que mejor se adecue a los principios y garantías de la Constitución Nacional y favorezca la progresividad de los derechos humanos. Al respecto cabe recordar que el Alto Tribunal sostuvo que el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional fortalece la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo accionar gubernamental que en la práctica de un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos (Fallos 331:250).

El análisis de la constitucionalidad de la movilidad jubilatoria, debería ser analizado a través del prisma de los principios basales sentados en “Caliva”, pero para el periodo 2018 a 2023, donde la jubilación **perdió contra el ripte mal medido:** en cuanto al rezago en el impacto de los salarios y por cuanto no se imputan la sumas no remunerativas abonadas en los salarios de los activos– y **contra la inflación** y **no logró mantener el nivel adquisitivo,** por cuanto en cada una de las sucesivas reformas hubo una quita en los haberes de los jubilados.

Noten VSS que desde la vigencia de la ley 27.609, es decir en los años 2021 y 2023, se van otorgando, 25 bonos para los jubilados de la mínima, lo que demuestra la insuficiencia del sistema previsto en la norma citada apenas sancionada.

A ello cabe agregarle y resaltar que los mencionados bonos **solo fueron otorgados para los jubilados de la mínima**, cuando la afectación al poder adquisitivo impactó sobre un universo mucho mayor de personas que, precisamente por su carácter de jubilados/pensionados, pertenecen –salvo muy escasas excepciones– a un **colectivo particularmente vulnerable** que, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, goza de una especial protección constitucional y convencional, especialmente luego de la reforma constitucional de 1994.

Los aumentos que recibieron la jubilación mínima, media y máxima, comparado con ciertas variable lógicas, cuya consideración es necesaria a los fines cumplir con el mandato constitucional de movilidad jubilatoria, completado por basta jurisprudencia del máximo tribunal, que tiene como objetivo analizar si realmente la jubilación es sustitutiva respecto del haber en actividad e integral en los términos del art. 14 bis de la CN, surge que en el mencionado período las jubilaciones **perdieron** contra: la **inflación (IPC)** -que mide el costo de vida-; el **RIPTE** -que mide la variación de los salarios (con la salvedad de que se cuestiona su medición, toda vez que no incluye las sumas no remunerativas abonadas en los salarios en actividad y previstas en la mayoría de Acuerdos Salariales, por lo que no refleja el aumento real de los salarios, y los salarios siempre van muy detrás de la inflación ); y contra los aumentos dispuestos por la CSJN para los **funcionarios judiciales** y que también se utiliza para fijar el monto de los **UMA** a saber:



En este sentido, se observa que en el año **2018** los jubilados de la mínima, media y máxima perdieron con respecto a la inflación un 19,14% y en el año **2019** un 2,68%.

En el año **2020**, de haber continuado vigente la ley 27.426 hubiera arrojado desde marzo a diciembre del mencionado año, un **aumento acumulado de 52,74% (el cual hubiera reflejado los aumentos del 7.2019 al 06.2020**) sin embargo, el aumento otorgado por Decretos N°163, 495, 692 y 899 fue de 35,31% para la mínima, 25,61% para la media y 24,28% para la máxima.

En el año **2021**, la nueva ley de movilidad 27.609 parte de un haber mal movilizado, por cuanto ya se habían devengado dos trimestres al momento de la publicación de la ley, de modo que la falta de un empalme adecuado ha producido una pérdida significativa en el haber de mi mandante por cuanto no tomo en consideración el trimestre 07.2020 al 09.2020, por cuanto el primer aumento parte desde la variación 10.2020 a 12.2020 para aplicar en marzo de 2021, perpetuando así la emergencia en el tiempo, el cual fue analizado por la Sala II de esta Cámara Federal de Salta, en los autos “Márquez” donde fijo el contenido de dicho trimestre, logrando así el empalme de movilidad , que la ley omitió.

Por su parte, en el año **2022**, la pérdida sufrida por las jubilaciones con respecto a la inflación fue de **22,32%.**

Considerando los aumentos acumulados desde el año **2018 a 10.2023**, la **INFLACION** registra un incremento de **1900,29%**; el **RIPTE** **1499,91%** y el **UMA/Magistrados Federales** **1958,07% y el haber movilizado con bonos 1712,54**

Por su parte, se observa que los incrementos de las jubilaciones acumulados en el mencionado período se encuentran **muy por debajo**, toda vez que la **jubilación mínima** aumentó un **1106,79%(sin bonos, con bonos 1712,54%)**, la **media** un **1020,28%** y la **máxima** un **1008,42 %.**

A todo ello, se le suma que la actual ley 27.609 ha demostrado **no ser superadora** de la ley que vino a reemplazar por cuanto no solo no pudo mantener el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, sino que fue tal el desfasaje producido que, desde su sanción a la fecha de interposición del presente recurso, va dando 25 bonos para los jubilados de la mínima, mostrando claramente la **insuficiencia de esta.**



Si a eso le sumamos los 25 Bonos que otorgo el gobierno en la vigencia de la ley 27.609, solo a las jubilaciones mínimas, para el mismo sector, nos da la pauta de la insuficiencia de la fórmula de movilidad, por lo tanto, la “nueva ley” no supera el test de no regresividad.

Cuadros elaborados con

Ripte: <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte>

IPC: <https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_23411BFA2B5E.pdf>

* **Es por ello por lo que esta parte solicita expresamente:**

1. **Inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley 27.426**

Esta parte solicita la inconstitucionalidad del art 2 de la ley 27.426: “ *la primera actualización en base a la nueva movilidad dispuesta se haría efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.*”

La constitucionalidad de una norma que fije nuevas pautas de movilidad reconoce un límite temporal que no puede ser infringido sin lesionar derechos constitucionales de los beneficiarios y afectando los s derechos de los jubilados por cuanto la norma pretende tener vigencia desde antes de su sanción, alterando la situación jurídica consolidada al amparo de una norma anterior. La incidencia del mismo en el haber de mi mandante afecta derechos constitucionales lo cual torna inconstitucional al art 2 de la ley 27.426.

La modificación de la ley de movilidad no solo plantea un cambió en la fórmula determinada para calcular la movilidad de las prestaciones, lo cual está bien porque es una facultad del congreso, pero que además establece que la primera actualización se practicará en marzo de 2018, afectando con ello la movilidad que para dicho mes ya se había devengado de conformidad con la normativa anterior pretendiendo así aplicarse retroactivamente.

El art 7 Código Civil y Comercial de la Nación establece respecto de la eficacia temporal de las normas que *“a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.*

Es decir que a la relación o situación ya constituida se le aplicará la ley nueva sancionada, para regir las instancias aún no cumplidas de dicha relación/situación. Solo las instancias ya finalizadas estarán regidas por la ley anterior.

Ahora bien, la norma, cuya inconstitucionalidad se peticiona, al derogar la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley 26.417, dejó sin efecto el ajuste que ésta contemplaba y ordenó aplicar un nuevo cálculo de la movilidad a periodos abarcados por la anterior ley, con carácter retroactivo, alterando con ello el alcance jurídico de las consecuencias de los actos o hechos realizados en su momento bajo el anterior régimen legal.

Es decir que en el supuesto de haberes percibidos bajo el régimen anterior, donde la situación jurídica se consolidó al amparo de la ley derogada, y respecto de los cuales mi mandante tenía un derecho adquirido a que el reajuste se realizara conforme la misma, la modificación de la fórmula produjo en lesión constitucional del derecho de propiedad, dado que la misma arroja un porcentaje de actualización sensiblemente inferior al que resultaría de aplicar la anterior norma y deja fuera del cálculo todo un trimestre que ya se había devengado.

Por Resolución E 2/2018 de la S.S.S., el valor de la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018, fue establecido en un 5,71%, conforme lo previsto en la Ley 27.426 cuando el porcentaje previsto conforme la fórmula de la Ley 26.417, estaba estimado entre un 12% y 14% arrojando finalmente un aumento en marzo de 2018 de 14.06%.

La Ley 27.426 establece que la recomposición del haber se dará en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Para determinar el porcentaje correspondiente a marzo se considerará el porcentaje que arroje la fórmula en función de la variación del IPCN y del RIPTE en el tercer trimestre del año previo (julio – septiembre). Para junio, se tomarán los datos del período que va de octubre a diciembre; y así sucesivamente (para septiembre y diciembre, las referencias del primer y el segundo trimestre respectivamente).

En otras palabras, para el aumento de marzo 2018, con la normativa anterior el cierre se hubiese producido el 31.12.2017, mientras que, con la nueva fórmula, dicho cierre se retrotrajo a septiembre de 2017, cuando ya se habían devengado más de 5 meses y 29 días, que conforme la ley 26.417, hubiesen formado parte de la movilidad de marzo 2018. Produciéndose así un atraso de seis meses en el periodo de referencia, y difiriéndose el último trimestre para el aumento correspondiente a junio de este año.

Esta última cuestión pretendió ser zanjada mediante la sanción del Dto. 1058/2018 que dispuso el pago de un “subsidio extraordinario” por única vez, y solo aplicable a aquellos beneficiarios que no perciben haberes superiores a los $10.000 Claramente, dicho subsidio extraordinario – que fue otorgado teniendo en mira las consecuencias que sobre los haberes de los pasivos tendría la sanción de la Ley 27.426 pero no alcanza a paliar el gravamen producido, desde el momento en que es otorgado por única vez, y no se aplica a la totalidad del universo de beneficiarios, sino solo aquellos que su prestación es inferior a la suma de $10.000 y que no es el caso de mi mandante, por lo que no cobró ese bono.

La merma en el haber de mi mandante aunque en el momento, 03-2018, no se considere “confiscatoria” por ser del 8.9%, el no haber aplicado el régimen de la ley 26.417 ya devengado, afecta derechos alimentarios que cuentan con garantía constitucional y vulnerando así los arts. 14 bis y 17 de la C.N, a la larga si se producirá la confiscatoriedad, ya que al tener mal determinado el haber de marzo de 2018, los sucesivos aumentos se harán sobre un haber mal movilizado, conforme lo acredito en la liquidación que adjunto.

Solicito expresamente se declare la inconstitucionalidad del art 2 de la ley 27.426, y se ordene que la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018 sea determinada de conformidad con las pautas fijadas en la Ley 26.417, debiendo empezar a aplicarse la nueva movilidad establecida por Ley 27.426 a partir del incremento correspondiente al mensual septiembre 2018.

1. **De la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad por la ley 27.541**

Al haber visto que los aumentos de 2020 dados por decreto fueron muy inferiores a los que hubiera correspondido conforme ley 27.426, solicito se expida y declare la inconstitucionalidad de la ley 27.541, del art 1 en cuanto declara la emergencia previsional , del art 2 inc. e, del art 55 y 56, como así también de los decretos 163/2020, 495/2020 , el 542/2020, 692/2020, y 899/2020 , en cuanto otorga aumentos insuficientes, extiende por 6 meses más la suspensión establecida por el art. 55 de la ley 27.541 respecto de la aplicación de la movilidad dispuesta por el art. 32 de la ley previsional 24.241 por ser confiscatoria, por violar el principio de igualdad y de razonabilidad de las leyes previsto en los art 16 y 28 de la CN y el principio de progresividad garantizado por la ley 27.360 que ratifica la convención interamericana de adultos mayores.

Dictados los decretos 163/2020, 495/20, 542/2020 y 692/2020 y 899/2020 solicito VS se expida y declare la inconstitucionalidad de la ley 27.541, y sus decretos reglamentarios, por ser confiscatoria, por violar el principio de igualdad y de razonabilidad de las leyes previsto en los art 16 y 28 de la CN y el principio de progresividad garantizado por la ley 27.360 que ratifica la convención interamericana de adultos mayores. La ley y su reglamentación es inconstitucional por los siguientes motivos:

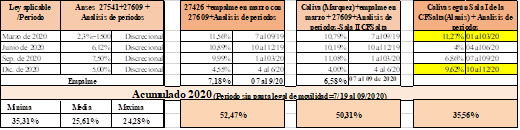
1. Porque al igual que el art 2 de la ley 27426 es regresiva, y afecta

el principio de progresividad

1. No debió haberse delegado la facultad de fijar una garantía

constitucional como es la movilidad jubilatoria.

1. No respeta las bases de la delegación del art 2 inc e.
2. No cumple con los recaudos formales y sustanciales de la doctrina de la emergencia
3. El art 56 establece un régimen diferenciado contrariamente a lo normado por el art 2
4. Los índices, y por lo tanto la movilidad ya se habían devengado al momento de sancionada la ley de emergencia
5. Los decretos son insuficientes e irrazonables y no cumplen con la garantía de movilidad jubilatoria del 14 bis.
6. Se suspendió la movilidad solo al régimen común que es el que menos percibe.
7. No cumple con la integralidad del haber y la jubilación no guarda su finalidad que es mantener el valor adquisitivo en el tiempo. Perdida en 2020:



1. **Planteo la inconstitucionalidad de la ley 27.609 :**

Si bien el criterio del Cámara en los autos Márquez Raimundo respecto de la ley 27.609 fue : “*Que, sobre el planteo de inconstitucionalidad de la nueva ley de movilidad, 27.609, sin perjuicio de que lo decidido por el juez de grado entraña un diferimiento que impide considerar un agravio actual, confirmamos el criterio adoptado, conforme lo explicitado por esta Sala in re “Márquez Raimundo”, Expte. Nº FSA 18430/2016, sentencia de 26 de noviembre de 2021.”,* podemos observar a la fecha depresentación de la liquidación que la afectación **es tangible** y la pérdida en los haberes jubilatorios ha sido tan significativa que el mismo Estado lo reconoció y otorgo 25 bonos a los jubilados de la mínima, desde su sanción hasta diciembre de 2023, por lo que solicito a VS declare la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley 27.609 y sus normas reglamentarias, por cuanto la misma ha demostrado ser regresiva y confiscatoria , afectando la integralidad del haber jubilatorio de mi representado.

Los aumentos dados por Anses fueron insuficientes en este período. Así el haber de los jubilados perdió un **52,14% contra la inflación**, un **47,24% contra el Ripte**, **58,34% con los aumentos de los funcionarios judiciales** y un **45,01% contra los aumentos a los haberes mínimos con bonos.**



En conclusión perdieron con todo, incluido con sus pares jubilados de la mínima, produciéndose un achatamiento en el haber previsional, más allá que los aumentos dados , lo fueron bajo el concepto de bonos, porque en la práctica no los recibieron, y era para paliar los efectos de la inflación -declaraciones del ex jefe de gabinete y la gerenta de Anses- inflación que solo sufrieron , al parecer, los jubilados de la mínima, castigándose a los jubilados que cobraban haberes medios o máximos, que son los que hicieron mayor esfuerzo contributivo .

Nótese del cuadro que adjunto obtenido del [BESS a septiembre de 2023](https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/bess) , de los 5.076.794 beneficiarios del SIPA (se excluyen regímenes especiales y retirados) 3.524.770 son jubilados con moratoria, y tienen un haber medio de $ 118.703, **incluido el refuerzo previsional.**

No obstante, los jubilados anteriores a la ley 24.241 o jubilados sin moratoria o con la prestación anticipada tienen un haber medio que oscila entre los $ 202.345 y los $ 228.289, por lo cual ninguno se vio alcanzado por los 25 bonos, y además de eso se observa que las jubilaciones vienen perdiendo producto de las sucesivas reformas el poder adquisitivo dado que estos haberes medios, representan el 60% del RIPTE, que medido a la misma fecha, y pese a ser un índice manipulado y con un delay de 13 meses, arroja un haber de $ 376.594,32 sueldo promedio de los trabajadores estables que no incluye sumas no remunerativas, es decir un índice mentiroso y distorsionado, pero que aún asi es superior a los aumentos de Anses.



Mas allá de la regresividad, y la afectación del principio de igualdad la cual se encuentra plenamente acreditada, la fórmula no es transparente y tiene una complejidad que dificulta su control y la hace manipulable, por cuanto sus compontes, pueden y así vemos que ha sucedido ser modificados indirectamente a modo de ejemplo:

* **RT(recursos tributarios)** varios de sus componentes se han modificado, así se ha decidió devolver el IVA a algunos ciudadanos, se ha elevado el piso de ganancias, se ha reducido el impuesto país, y todas estas decisiones políticas inciden claramente en los recursos tributarios.
* **RIPTE/ISAL:** El RIPTE tiene una metodología más que cuestionable, si tenemos en cuenta que ya en su presentación se dice que no necesariamente “**El RIPTE no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado”**  y esto es cierto por cuanto además **“Solo cuantifica los componentes remunerativos del salario (imponibles al sistema de seguridad social)”** y es innegable que los trabajadores en actividad han tenido incrementos notables en sus haberes en concepto de sumas no remunerativas , al punto tal que hasta el gobierno ordeno a los privados que pagaran [bonos extraordinarios](https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2604) ante un contexto económico desafiante.
* **Beneficiarios:** Se incrementaron los beneficiarios con la moratoria prevista en la ley 27.705 , a lo que se suma que no queda claro que se considera como beneficiarios por cuanto también se otorgó un nuevo beneficio, denominado nuevo IFE para trabajadores informalesQuiénes pueden cobrar el “nuevo IFE 2023″,refuerzo destinado a los trabajadores informales que tienen entre 18 y 64 años, no presentan ingresos y no fueron alcanzados por los últimos beneficios económicos, estos son beneficios asistenciales.

Teniendo en cuenta que el aumento de beneficios, sean estos contributivos o no, aumenta el divisor de la formula, se afecta el índice de movilidad jubilatoria a la baja, nótese que en el período de la ley 27.609 los jubilados con moratoria fueron 706.635 y sin moratoria 348.350, es decir que los jubilados con aportes totales representan un 33% del total de nuevos beneficiarios.



* **R:**recaudación tributaria: esto depende de la política fiscal que se adopte y ya se ha observado que se dieron condonaciones de deudas [[ley 27.653](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5101-2021-356960) y RG AFIP 5101/21](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5101-2021-356960), se suspendieron de ejecuciones (v.gr. RG AFIP 4936, 4953, 5000 y 5052,), lo cual repercute de manera directa e ineludible la determinación de la movilidad jubilatoria, que todos los trimestres debe ponderar la [variación de la recaudación tributaria con destino a ANSeS](https://www.argentina.gob.ar/economia/ingresospublicos/pormesytasa/anteriores).

Todo esto demuestra que son los jubilados los que terminan financiando a los trabajadores, y que se ha perdido la solidaridad intergeneracional y que constantemente se busca , por lo esta ley es una clara involución del concepto de seguridad social porque pretende darle un fin asistencialista como tenía en sus orígenes, como una dádiva, -que se observa también con el otorgamiento de bonos de manera discrecional- pretendiendo olvidar la lucha por el derecho, que logró la conquista de los derechos sociales y su incorporación en la normativa internacional que garantiza el derecho al trabajo y a la seguridad social y en nuestra Constitución nacional.

El aumento jubilatorio para diciembre 2023 fue fijado por [Res 220/2023](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/298786/20231122)  en 20,87%. El mismo es trimestral y con rezago, lo cual hace que haber jubilatoria pierda fuertemente el poder adquisitivo, por cuanto hoy tenemos una inflación superior al 10% mensual ([12,8% ipc para noviembre de 2023](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_23EA48BE000C.pdf), un 30% estimado para diciembre)

Es decir que, ese aumento dado a mi mandante en su haber en diciembre de 2023, se aplicará también en enero y febrero de 2024, y es el reflejo de las variables de la fórmula de movilidad jubilatoria de junio, julio y agosto de 2023.

La inflación acumulada de junio -primer mes de la variable tomada- a noviembre de 2023-último índice publicado-, ya es del 75%, por lo que el jubilado tiene que vivir con ese aumento del 20,87 % y hacer frente con su haber jubilatorio a una inflación que rondará el 100%, hasta el próximo aumento en marzo de 2024.

Solicito apruebe la liquidación practicada de manera parcial, y ordene aplicar IPC o el índice que VS estime conveniente al período 2021 a 2023, con una corrección mensual, a fin de mantener el poder adquisitivo del haber jubilatorio de mi representado, reservándome el derecho de reclamar las diferencias que surjan de su aplicación, siendo imperioso ejecutar las diferencias adeudadas por el incumplimiento de la sentencia.

Lo solicitado radica en la necesidad de respetar la naturaleza sustitutiva del haber jubilatorio respecto del salario, el poder adquisitivo del mismo, y su consecuente integralidad conforme el mandato constitucional del art 14 bis, que le permita al actor tener una vejez digna.

1. **Marco constitucional de la petición realizada**

Con la reforma constitucional de 1994, se incorpora el paradigma del **desarrollo humano** (art. 75, inc. 19, principalmente) y de la **dotación de jerarquía constitucional a diversos tratados sobre derechos humanos** (art. 75, inc. 22 CN),lo cual vino a redefinir y a resignificar principios/derechos/garantías clásicos, como el de la igualdad real, lo que impacta decididamente, en lo que aquí interesa, en la **indispensable protección y defensa especial de quienes pertenecen a grupos tradicionalmente desfavorecidos, olvidados, rezagados (art. 75, inc. 23 CN).**

En efecto, no puede dejar de recordarse que en “García” (Fallos 342:411) nuestro máximo Tribunal se encargó de enfatizar que “*la reforma constitucional introducida en 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo ‘medidas de acción positiva’* […] *en beneficio de ellas*” (Consid. 12).

Y agregó que “*el envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ello, las circunstancias y condicionantes de esta etapa del ciclo vital han sido motivo de regulación internacional*” (Consid. 13).

Por ello, en esa misma línea de razonamiento esta parte afirma, junto con el alto Tribunal que “*de lo anteriormente reseñado se desprende que, a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos*” (Consid. 15).

Es así que no resulta ni constitucional ni convencionalmente tolerable que las normas impacten negativamente en los haberes de los integrantes de este “*grupo vulnerable e históricamente postergado*”, en términos de la CSJN en el precedente citado (Consid. 21). Lo contrario importaría **admitir un efecto regresivo** rotundamente rechazado por la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como interamericana, cuando de derechos humanos esenciales se trata.

Efectivamente, sólo por citar un antecedente en este punto, según la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) las medidas regresivas son incompatibles con la vigencia plena del sistema de derechos humanos. Y por tales se entienden todas aquellas disposiciones o políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel del goce o ejercicio de un derecho protegido[[5]](#footnote-5). Así, esta definición de regresividad involucra dos nociones. Son regresivas: a) las políticas que impliquen un retroceso en los resultados, mesurable a través de indicadores o referentes empíricos; y b) las disposiciones normativas que impliquen un retroceso en la extensión concedida a un derecho. Al comparar una norma anterior con una posterior, el estándar de juicio de *regresividad normativa* consiste en evaluar si el nivel de protección que ofrece el ordenamiento jurídico ante una misma situación de hecho ha empeorado. Y es precisamente ésta la situación que se verifica en los hechos que originaron la presente causa.

Esta línea jurisprudencial no solo ha sido continuada por nuestra Corte Suprema (ej. *in re* “Giménez”, Fallos 344:1788), sino que la idea de la necesaria y especial protección de grupos tradicionalmente relegados, olvidados, postergados luego de la reforma constitucional de 1994 ha sido profundizada por el Tribunal, el que se ha encargado de tachar como inconstitucionales normas que incluso eran en apariencia “neutras”, por repercutir negativamente en la situación fáctica real de uno o más individuos pertenecientes a estos colectivos.

Así, ha afirmado, por ejemplo, que luego de la reforma constitucional de 1994, el principio de igualdad que surge del art. 16 de la Constitución Nacional debe también ser considerado a la luz del art. 75 inc. 23 y de diversas disposiciones contenidas en los tratados con jerarquía constitucional.

Estas normas, al incorporar, por un lado, mecanismos de acciones positivas para favorecer a determinados grupos y, por el otro, delinear categorías sospechosas de discriminación, buscan garantizar la igualdad real de los habitantes. “*Es que en el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ahora ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo. El análisis propuesto considera el contexto social en el que se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, y de qué modo impactan en los grupos desventajados*” (Fallos 340:1795, consid. 18).

Y ha resaltado, con cita del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, que “*A pesar de su apariencia -que por sí sola no ofrece ningún reparo de constitucionalidad-, puede ocurrir, sin embargo, que prima facie la norma -aplicada en un contexto social- produzca un impacto desproporcionado en un grupo determinado*. *Esto es, ‘leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras’ causantes de una ‘discriminación sistémica (...) que genera desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros’*" (Consid. 20).

En lo que aquí resulta de particular interés, la Corte especifica que en los casos en los cuales exista una norma neutral que prima facie genere un impacto desmedido en los miembros de un grupo, resultará necesario para analizar su constitucionalidad, comprobar la manera en que dicha norma se ha implementado. En otros términos, la disposición puesta en crisis justifica que el tribunal analice los efectos que su aplicación ha generado en la realidad (Consid. 21). Y “*una vez comprobado ese efecto de desigualdad y afectación real, el Estado debe justificar la necesidad de los efectos desproporcionados que causa la disposición. En el caso de que no logre hacerlo, la norma aparentemente neutra resultará inconstitucional*”. (Consid. 22).

Desde el punto de vista constitucional, ante las emergencias, una de las consecuencias que se observa es una alteración en el principio de división de poderes por cuanto debido al hiperpresidencialismo reinante en Argentina desde la década del 90, se delegan holgadamente facultades del poder legislativo en el ejecutivo, el cual hace un uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia, produciendo una fuerte restricción a las libertades, derechos y garantías individuales o actuando como una rama más del poder ejecutivo , por cuanto como sucedió con esta ley, no hubo debate parlamentario, no se permitieron modificaciones, se apartaron de las sugerencias de la comisión de expertos, por lo que se hace necesario que el Poder Judicial se fortalezca en esos momentos y profundice los controles de constitucionalidad de las normas dictadas en pos de garantizar los derechos fundamentales, cuando los otros poderes los vulneran. Argentina ha vivido (y sigue viviendo) en emergencias declaradas por el legislador durante los últimos 19 años, sin contar las emergencias previas al año 2001, vive en emergencia porque es la forma que encuentran quienes ostentan el poder de gobernar.

Dentro del tal marco, es constitucionalmente inaceptable que se recurra al instituto de la emergencia y se vulneren sistemáticamente lo derechos de los adultos mayores, sujetos que deben ser especialmente protegidos, en épocas de crisis es donde deben activarse las garantías de protección de los derechos humanos contenidas en nuestra constitución nacional.

Como decía Alberdi “se aspira a la realidad, no a la esperanza. Las constituciones serias no deben constar en promesas, sino de garantías de ejecución” por lo que la garantía de movilidad jubilatoria debe hacerse especialmente operativa en tiempos de emergencia, y es por ello por lo que solicito a VS declara la inconstitucionalidad de las normas solicitadas.

Por último, **corresponde señalar que la CSJN ha dejado firme el criterio sentado en los fallos “Caliva-Márquez**” cuando recientemente declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuesto por ANSES (art. 280 del CPCCN) contra dichos decisorios (“Zapata, Carlos Benedicto” y otros” y “Stenfer, Patricia Catalina” y otros. Sentencias del 24.05.2022), no así, los recursos de quejas interpuestos en contra de las sentencias de la Sala I, que aplican Alanís, interpretando mal Caliva-Márquez, que siguen su tramitación ante el máximo tribunal.

**X. OPORTUNIDAD PROCESAL**

Si bien esta liquidación es posterior al dictado de la sentencia, la suspensión de la fórmula de la movilidad incide en el haber jubilatorio de mi mandante.

Esta parte plante la inconstitucionalidad las leyes que afectaron la movilidad jubilatoria, por cuanto “Anses”, afecta la seguridad jurídica de mi mandante, pues al modificar la ley ante cualquier cambio de gobierno o vicisitud económica, siempre en detrimento de su haber y afectando la garantía constitucional de integralidad de este, la división de poderes, la delegación de facultades entre otras normas de nuestra CN.

Los planteos fueron posteriores a la sentencia por cuanto la modificación de las pautas de movilidad, que alteran el haber de mi mandante, también fueron posteriores al dictado de esta.

En la primera oportunidad procesal se está solicitando la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y se garantiza así el debido proceso y el derecho de defensa de la contraria, corriéndose traslado del planteo de inconstitucionalidad, de una norma que suspende la ley ,en detrimento de un grupo vulnerable, en época de pandemia donde el estado debe reforzarse la protección de los mismos y de carácter netamente regresivo según la perdida sufrida en 2020.

Así que no se busca repotenciar un haber sino defender la garantía constitucional de movilidad jubilatoria.

Antes que nada, no se puede perder de vista que la CSJN ha reconocido la facultad de los jueces y tribunales inferiores de ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio (Fallos 335: 2333).

En el caso puntual de la movilidad, las sucesivas reformas de la ley producidas entre 2018 a 2023 han afectado el derecho constitucional a tener un haber integral, al afectarse la movilidad jubilatoria la cual deja de cumplir con su finalidad, que es mantener el valor del haber en el tiempo, a lo que suman diferentes análisis , como son que en materia de movilidad no pueden existir periodos superpuestos, ni tiempos muertos , sin perder de vista que en materia de emergencia, sino se recompone el haber , cesada la emergencia, la misma permanecerá en el tiempo.

Es por ello que el juez , puede resolver en la etapa de ejecución, sea a pedido de parte, o de oficio, si estas normas afectan el haber dado que contrarían el art 14 bis, 16, 17, 18, 28 , 31 , 33 y 75 inc 22 y 23 de la CN.

En los autos Abraham[[6]](#footnote-6) el juez , al momento de tener que resolver en la liquidación donde la parte actora introdujo la cuestión en torno a la consideración inconstitucional de la leyes 27.426, 27.541 y 27.609, considero que si análisis “*deviene ineludible toda vez que incide en la determinación de la movilidad que en definitiva corresponde aplicar al haber cuyo reajuste aquí se reclama y en un todo de acuerdo con la doctrina que impone atender a las circunstancias sobrevinientes que no es posible desechar (Fallos: 308:1489; 311:787; 312: 555; 315:123 y 325:28, entre muchos otros).*

*Ello de ninguna manera importa incurrir en un exceso de jurisdicción, sino que, por el contrario, implica valorar en debida forma las pretensiones incoadas a la luz del derecho vigente al momento de sentenciar, encontrando también tal proceder su fundamento en los principios de celeridad y economía procesal.*

*Destáquese al respecto, que dada la naturaleza de causas como la que nos ocupa -que resultan de monto indeterminado pues se originan en obligaciones de cumplimiento sucesivo- deben existir pautas claras para el momento de liquidarse las sumas de condena.”*

Del mismo modo, en **“Gamarra”** [[7]](#footnote-7)la cámara federal de Salta se pronunció respecto al planteo de cosa juzgada, y aclaró que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada *“****no implica la imposibilidad absoluta de resolver nuevas cuestiones que puedan suscitarse entre idénticas partes, sino el sucesivo y reiterado juzgamiento de las mismas”****. Y concluyó que, si existe una sentencia que reconoció el derecho a la redeterminación del haber inicial y su movilidad, “(…) es en esta oportunidad, etapa de ejecución (arts. 499 y cc del CPCCN) que se puede tener precisión respecto de la cuantía del haber y la razonabilidad o no de la quita por aplicación de la norma citada (…)”*

En similar sentido se expresó la Sala I en los autos “Flores Humberto c/Anses y otro s/ Reajustes varios” Expte 15100027/2011 el 09.03.2023 donde resolvió: *“Que corresponde rechazar los agravios referidos a la improcedencia de resolver en la etapa de ejecución el reajuste de la movilidad del haber del actor por períodos posteriores que no se encuentran incluidos en la sentencia definitiva, en tanto las partes han tenido oportunidad de debatir sobre dicha cuestión, por lo que se ha respetado el debido contradictorio.*

*Es que resultaría un exceso ritual rechazar dicha pretensión y obligar al actor a realizar un nuevo juicio para llegar, en definitiva, a igual situación, por lo que una solución así importaría desvirtuar el sentido de las formas procesales, que son meros instrumentos para la observancia de los derechos sustanciales, sobre todo si se tiene en cuenta la edad de la Sra. Cabrera (76 años), quien se encuentra litigando desde el año 2011 a los fines del reconocimiento de su derecho, por lo que no resulta necesario un nuevo juicio de conocimiento ni abrir otra etapa probatoria para esclarecer la cuestión, correspondiendo su tratamiento en esta oportunidad procesal*.”

Continuó diciendo: “*En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Cingolani, Francisco Florencio c/Anses s/Ejecución previsional”, sent. del 10/4/12 revocó una resolución judicial que había limitado el derecho del afiliado a lograr una recomposición de sus haberes previsionales al período dispuesto en la sentencia definitiva, en cuya oportunidad sostuvo que “la limitación temporal de la ejecución vulnera la cosa juzgada, pues la sentencia cuyo cumplimiento procura el actor no sólo establecía una pauta para el cálculo del beneficio, sino que su aplicación permitía determinar el nivel de la prestación para el lapso subsiguiente y hasta tanto fuera incrementado con nuevas disposiciones legales o decisiones judiciales en materia de movilidad” es que señaló que admitir una tesis contraria a la que defiende implicaría un dispendio jurisdiccional obligando al jubilado a iniciar un nuevo juicio de conocimiento a fin de que se le reconozca el monto de su prestación en el periodo descartado.”*

La Sala II el 14.02.2023 en la causa “Campos Toranzos, Marcos Aurelio c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” (Expte. N° 15100257/2012) “*confirmó la facultad de los magistrados de la determinación de criterios de movilidad en la etapa de ejecución de sentencia que no fueron contemplados en el pronunciamiento definitivo por una cuestión temporal, con basamento en que los jueces deben siempre resolver según las circunstancias actuales aunque sean sobrevinientes; en atención a la naturaleza alimentaria de la prestación y en dicho caso particular, a la avanzada edad del accionante, argumentando que por razones biológicas posiblemente el actor se vería impedido de afrontar un nuevo proceso y acceder a una decisión útil (Fallos: 330:5342), invocando también razones de economía procesal para arribar a tal decisión”.*

1. **PLANILLA DE LA LIQUIDACION**

Anexa planilla de liquidación. que solicito tengan como parte del presente escrito, donde se adjunta computo del haber de caja, computo del haber reajustado y retroactivo.

Solicito se corra traslado a la demandada con las copias adjuntadas, y se intime a la demandada a adjuntar RUB histórico de mi mandante y a crear la secuencia de ejecución de sentencia en sede administrativa conforme la sentencia interlocutoria recaída en autos.

1. Hago reserva de caso federal por estar en juego el art 14 bis ,16,17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional y tratados internacionales por cuanto la demora en poner al pago el haber jubilatorio de manera integral de mi mandante y el comportamiento moroso de Anses, afecta el derecho de propiedad, la división de poderes, de acceso a justicia en un plazo razonable, pero sobre todo el derecho a una vejez digna.

Proveer en conformidad

**JULIA TAMARA TOYOS**

**ABOGADA**

**MAT. FED T 108 F 978**

1. Cassagne, Juan C. “Curso de Derecho Administrativo”, La Ley, Bs. As., 2018, T. II, p. 242. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rossi, Julieta “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Courtis, Christian (comp.), cit, pp. 79 y ss. [↑](#footnote-ref-2)
3. BIDART CAMPOS, Germán, “Las reducciones salariales por emergencia económica”, en LL 1997-A-62. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fallos 265:291 [↑](#footnote-ref-4)
5. Asamblea General de la OEA, "Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador” del 7-06-2005. AG RES*.* 2074 (XXXV-O/05). Nota al art. 11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Juzgado Federal de Salta N° 2 , 19.10.2022, Expediente N° FSA 25000393/2010 “ABRAHAM, RUBEN DARIO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS” . [↑](#footnote-ref-6)
7. Sala II, Cámara Federal de Salta “GAMARRA, MARIA DEL HUERTO DOLORES c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS” Expte. N°41000298/2005 (Juzgado Federal N° 2 de Jujuy) , 26 de abril de 2016. [↑](#footnote-ref-7)